



Informe 0279/2011

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la entrega del expediente completo referente al abono de ayudas en concepto de “acción social” al personal del Ayuntamiento consultante a solicitud de uno de sus empleados con la finalidad de interponer el correspondiente recurso contencioso administrativo. Señala el consultante que como consecuencia de una reclamación realizada por dicho empleado ante la resolución denegatoria del abono de unas facturas presentadas fuera de plazo se procedió a remitirle la documentación que le afecta como interesado, desestimándose el resto por la alta sensibilidad de los datos que obran en el mismo.

La transmisión de los datos a que la consulta se refiere constituye una cesión de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como *“Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”*.

En relación con las cesiones, el artículo 11.1 de la citada Ley Orgánica dispone que *“Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”*. No obstante, este consentimiento no será preciso, según el artículo 11.2 a) de dicha Ley cuando exista una norma con rango de Ley que autorice la cesión de los datos.

El artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, reconoce en su apartado a) el derecho de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas *“a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos”*.

La condición de interesado en el procedimiento administrativo viene recogida en el artículo 31 de la citada Ley 30/1992, cuyo apartado 1 dispone que:

*“Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:*

*a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.*

*b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.*

*c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.”*

La previsión contenida en el citado precepto supone una excepción legal al consentimiento del interesado para la comunicación de sus datos de carácter personal, de modo que la cesión planteada en la consulta podría encontrar amparo en lo establecido por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.

Ahora bien, aunque el solicitante de los datos ostenta, obviamente, la condición de interesado en el procedimiento de abono de ayudas por acción social por haber participado en el mismo, por lo que debe considerársele reconocido el derecho establecido en el artículo 35 de la Ley 30/1992, debe recordarse que, como ha como ha señalado reiteradamente esta Agencia, el hecho de que una norma con rango de Ley habilite el tratamiento o cesión de los datos no resulta por sí sola suficiente para considerar dicho tratamiento o cesión sin más como amparados por la Ley Orgánica 15/1999, siendo igualmente preciso que los mismos resulten conformes a lo dispuesto en la mencionada Ley y en particular a los principios consagrados por su artículo 4. A este respecto el número primero de dicho artículo recoge el principio de proporcionalidad al disponer que *“Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.”*

Para determinar si la comunicación de los datos de los demás participantes reúne los requisitos señalados en el artículo 4 transcrito será preciso examinar si la misma resulta necesaria para la legítima finalidad del solicitante de recurrir la resolución por la que se le conceden las ayudas y obtener una resolución judicial favorable a su derecho. Para ello sería preciso que dicha documentación viniese a acreditar la lesión de su derecho o influyese directamente o indirectamente en el resultado del recurso. Así ocurriría, por ejemplo, si la cuantía de la ayuda concedida variase en función del número de solicitantes y gastos justificados por cada uno de ellos. Por el contrario, si la cuantía de la ayuda es fija, concediéndose automáticamente por la acreditación de los requisitos exigidos en la convocatoria, resultaría excesivo el conocimiento de los datos de los demás, en tanto que dicha circunstancia no afectaría al reconocimiento de su derecho.

En el presente supuesto, no cabe hacer ninguna precisión al respecto al desconocerse la estructura de las ayudas a que la consulta se refiere y los criterios de distribución de las mismas. No obstante, cabe indicar que el



solicitante de los datos se limita a señalar genéricamente que los mismos se van a utilizar para defender sus derechos ante la jurisdicción competente, sin que resulte evidente su necesidad de aportar el expediente completo toda vez que el objeto del recurso, según se desprende de la consulta, es la denegación de pago de unas facturas presentadas por el solicitante de los datos fuera de plazo, por lo que la comunicación de los datos de todos los demás empleados de la Corporación no parece responder al principio de proporcionalidad recogido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999.

Todo ello sin perjuicio de que dicha documentación pueda ser requerida por el Juzgado o Tribunal ante el que se presente el correspondiente recurso contencioso-administrativo, en este caso la entrega de la documentación que el mismo solicite encontraría su amparo en lo previsto en el artículo 11.2. d) de la Ley Orgánica 15/1999 conforme al cual no será preciso el consentimiento de los afectados *“Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.”*